

de toda aplicacion de penas propiamente tales.

5º: que la destitucion del cargo de Gobernador constitucional de un Estado, debe estimarse como una pena propiamente tal, que no puede aplicar en ningun caso la autoridad legislativa (Congreso de la Union ó Legislatura de Estado) puesto que esa pena no es reducible á las correccionales de multa ó reclusion de que habla el art. 21, ni á las conminatorias especiales de que trata el art. 61; ni es de tenerse como la simple declaracion de culpabilidad ó de haber lugar á formacion de causa, que establecen los arts. 103, 104 y 105; ni puede ser materia de ley ó acuerdo económico, conforme á los arts. 64 y 72.

6º: que en consecuencia, los decretos números 172 y 180 de la Legislatura de Coahuila, que destituyen del cargo de Gobernador constitucional del Estado al C. Victoriano Zepeda, se han dado en contravencion á los arts. constitucionales citados, y violan en la persona del quejoso, no solamente las garantías que ellos le otorgan, sino ademas, las especialmente consignadas en los arts. 13, 14 y 20 de la misma Constitucion federal.

7º: que independientemente de los decretos núms. 172 y 180 ya citados, el C. Victoriano Zepeda se encuentra separado de su cargo de Gobernador del Estado por otras varias causas, resoluciones ó actos de autoridad que no han sido reclamadas ni debatidas, y que por lo mismo no deben prejuzgarse en este juicio.

Por las razones y fundamentos expuestos en los anteriores considerandos, se declara:

1º: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Victoriano Zepeda, contra los efectos de los decretos núms. 172 y 180 reclamados.

2º: Este amparo no puede entenderse contra los demas actos de autoridad que no han sido reclamados, y que tienen separado de su encargo constitucional al quejoso.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su

origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Enero 6 de 1875.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Nuevo Leon por el C. Prisciliano Zambrano, contra el C. Alcalde 2º de Monterrey Inc. Perfecto Gutierrez, que lo citó á juicio verbal y lo conminó con imponerle multas si no concurría al juicio que le promovió el C. Julio Treviño y con fallar en rebel-dia.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que los presentes autos formados con motivo de la queja de amparo interpuesta por el C. Prisciliano Zambrano por la violacion en su persona de una de las garantías que el pacto fundamental de la República otorga al hombre, se ha mandado que conforme á la ley de la materia, permanezcan á disposicion de las partes en la secretaria del Juzgado, á fin de que puedan tomar los apuntes que crean convenientes, y dentro del término formular sus respectivos alegatos, en cuya virtud, presenta el que suscribe el suyo, que como se advertirá, está reducido á muy breves y

ligeras observaciones, á fin de no incurrir en el defecto de repeticion, supuesto sus razonamientos que adujo en su dictámen de 9 del actual, y supuesto tambien, que las pruebas rendidas en tiempo habil por el quejoso, vienen á robustecer los fundamentos de su citado dictámen.

Alégase por el Sr. Zambrano, que la garantía consignada en el artículo 16 de la Constitución política de 5 de Febrero de 1857, le es violada por el C. Perfecto Gutierrez, que titulándose Alcalde 2º local, lo cita para que ante él ocurra á contestar una demanda que sobre cobro de pesos le promueve el apoderado de la ciudad, siendo así, que dicho Sr. Gutierrez no tiene autoridad competente para hacer tales citaciones, sufriendo de ello la violacion de la garantía mencionada, por que se le causa una molestia que no está dispuesto á sobrellevar, por una autoridad incompetente, contra el expreso tenor del citado artículo 16.

El quejoso argumenta de este modo: el C. Perfecto Gutierrez no es autoridad legítima: luego no es autoridad competente. Tal argumentacion está de acuerdo con los principios reconocidos en derecho, y por lo mismo, legalmente hablando es muy lógica. Se dice que un Juez tiene jurisdiccion, cuando se halla revestido de potestad ó poder para administrar justicia, potestad ó poder, que si en otros países dimanar del rey, en el nuestro solo debe su origen á la ley, como consecuencia forzosa de las liberales y democráticas instituciones que felizmente rigen en la República; y supuesto que la competencia en general y jurídicamente hablando, no es mas que la medida de aquel poder, ó sea de las facultades concedidas por la ley á cada uno de los funcionarios públicos, cuando se alega incompetencia á uno de estos, indudablemente se le dice, ó que no obra dentro de los límites que la ley le ha demarcado al darle jurisdiccion, ó bien, que carece absolutamente de dichas facultades, porque ninguna ley se las da. Esto último se asegura por el

ocurrente con relacion al C. Perfecto Gutierrez, y en semejante caso habrá de remontarse el razonamiento hasta investigar lo que hay de cierto, examinando si la investidura que alega tener el citado Sr. Gutierrez la ha obtenido realmente ó no, conforme á las leyes del Estado, y en consecuencia, si tiene ó no la jurisdiccion ó las facultades que se conceden á los Alcaldes locales, pues es evidente que en el primer caso, la incompetencia absoluta que se le objeta no existiría y la queja sería improcedente; mas en el segundo, supuesto que la jurisdiccion ó la competencia que es su medida, solo puede existir cuando existe antes el carácter de autoridad, para lo que hay que arreglarse á la Constitución y ley electoral relativa, faltando su observancia, falta tambien la competencia, ó la que se pretenda tener es ilegítima, por el vicio ó ilegalidad de su origen, y equivale á la incompetencia.

Antes de pasar adelante, conviene desvanecer un grave error en que se aparenta incurrir por los los poderes supremos de algunos de los Estados de la Confederacion Mexicana. Se dice, que supuesta la soberanía de los Estados garantizada por el pacto fundamental de la República en sus artículos 40 y 41 para lo que concierne ó toca á su régimen interior, la Federacion no puede en ningun caso ni aun objetándose incompetencia, llevar sus investigaciones hasta examinar si conforme á las leyes de los Estados, las autoridades locales tienen su investidura, porque tocando este punto á su régimen interior, las autoridades de los mismos Estados y su leyes, son las únicas competentes para apreciar su legitimidad ó ilegitimidad, y solo contraviniendo á los citados artículo 40 y 41, seria dado á la justicia federal ingerirse en cuestiones de tal naturaleza. Si se negara á la Justicia de la Union la facultad de decidir, fallar ó resolver acerca de la validéz ó nulidad, legitimidad ó ilegitimidad de una eleccion ó nombramiento de las autoridades locales, el suscrito desde luego manifestaría su confor

midad en este respecto; mas negarle la facultad de apreciar la validéz del título con que funcionan dichas autoridades, ó sea examinar su legitimidad ó ilegitimidad para solo el efecto de declarar si son ó no competentes, es un absurdo que difícilmente podrá sostenerse, ni menos fundarse. Si semejante principio llegara á alcanzar su triunfo, indudablemente nuestras actuales instituciones sociales quedarían minadas en su base, y pronto las veríamos desaparecer, porque desde entonces todo esfuerzo sería vano á contener los avances del absolutismo y tiranía, que con asombrosa rapidéz comenzaría á desarrollarse en los Estados, en que por desgracia los que mandaran no estuvieran animados de muy nobles y patrióticos sentimientos, alentados con la impunidad derivada de la absoluta soberanía de los Estados. Mas por fortuna, una vez que el pueblo mexicano ha expresado ya su soberana voluntad por medio de sus legítimos representantes en la Constitución de 1857, declarando, que todos los Estados se hallan obligados á respetar dicha Constitución y á cumplir lo pactado en ella, aquel principio disolvente no puede subsistir, porque contiene la contravención palmaria á lo establecido en la misma Carta de 57.

El mismo artículo 41 que sirve de apoyo á sus sostenedores, está demostrando la inconsecuencia notoria en que se incurre al pretender para los Estados una soberanía ilimitada y absoluta. El expresa que, si los Estados son soberanos, esta soberanía deben ejercerla en los términos establecidos en sus respectivas Constituciones particulares, en lo que á primera vista se descubre una notable restricción á aquella soberanía, pues no puede estenderse mas allá de los términos marcados en sus Constituciones; y mas se patentiza la inconsecuencia, si se advierte, que en ellas nada puede establecerse que contravenga á las estipulaciones del pacto federal, segun se expresa en la última parte del citado artículo 41. Si, pues, en algun Estado se traspasan ó con-

travienen los términos de sus Constituciones locales, se infringe abiertamente el pacto fundamental en la parte que se acaba de citar, lo mismo que cuando en ellas se establece algo que pugne con los principios consignados en dicho pacto fundamental; y una vez infringido ó violado este, es innegable que la Justicia federal es la única competente para conocer y decidir sobre todas las contiendas que se susciten con motivo de tal violación, porque á ella únicamente, no solo se le permite, sino se le impone el deber de hacerlo, en los artículos 97, 101 y 102 de la Constitución; y para llevar este deber, nadie puede negarle la facultad de examinar si en efecto se ha contravenido á lo expreso en los términos de las Constituciones locales, sea cual fuere el caso de la cuestión, ó á lo estipulado en el pacto fundamental; mas, cuando hay ciudadanos que denuncien tales contravenciones y reclaman porque se han ejecutado en su perjuicio.

Ahora bien, en Nuevo Leon las autoridades locales reciben su investidura de la Constitución local y de las leyes relativas emanadas de ella; así es que, segun lo que se acaba de ver, y supuesto que para que haya competencia es preciso que antes exista autoridad, la Justicia de la Union tiene la facultad de examinar en un caso dado, si al investirse á alguno con el carácter de autoridad, se ha cumplido con los requisitos que prescribe la Constitución de Nuevo Leon, y si por lo mismo se ha obrado en los términos que ella previene, ó lo que es lo mismo, procede dentro de la órbita de sus facultades constitucionales, al calificar si un Juez local es ó no verdadero Juez, si su nombramiento es ó no legítimo porque se hayan observado ó infringido las leyes á que debe su creación.

Sentado esto, no hay para que hablar mas en cuanto á la cuestión, pues en el anterior dictámen se ha demostrado, que la autoridad que pretende representar el C. Perfecto Gutierrez es ilegítima, porque la elec-

cion de Ayuntamiento de que es miembro, debe su origen á una serie de infracciones á la Constitucion local y ley constitucional relativa, en los artículos respectivos que allí se citan; y siendo esto así, queda demostrado que el Sr. Gutierrez carece absolutamente de competencia, toda vez que carece de autoridad, ó que la que ejerce es ilegítima, supuesto que la competencia supone naturalmente la real y verdadera existencia de la autoridad, y en consecuencia, que la Justicia de la Union tomando como fundamento la carencia de autoridad ó su ilegitimidad, debe considerar incompetente la que pretende representar el expresado Sr. Gutierrez y violado con sus actos el artículo 16 del Pacto fundamental de la República, que exige entre otros requisitos para que se pueda inferir molestia á un hombre, el que ella dimanase de una autoridad (se entiende verdadera ó legítima) y que esta autoridad sea competente, ó que se sugiera á los límites que la ley lo haya demarcado, aunque en el caso la incompetencia es absoluta, lo cual no obsta para que esté comprendida en dicho artículo, que ninguna distincion hace.

Y no se diga que supuesto que el recurso de amparo está concedido por la Constitucion y ley relativa solo contra los actos de las autoridades, y que no teniéndose como autoridad al Sr. Gutierrez, no debe proceder el amparo, porque esto equivaldría á dejar á los ciudadanos entregados al mayor de los despotismos y haría de mejor condicion á los usurpadores del poder público que á las legítimas autoridades, lo cual no sería racional, á mas de que teniendo aquellos los mismos medios y recursos que estas para ejecutar sus disposiciones nulas, es preciso que la Federacion enerve sus procedimientos atentatorios á las garantías individuales, en los mismos términos que si se tratara de verdaderas autoridades, con quienes se debe equiparar para solo este efecto, supuesto que para librarse de sus vejaciones, no sería el mejor camino ocurrir á ellas mismas,

y no queda otro recurso á los ciudadanos, que acogerse como lo ha hecho el Sr. Zambrano, al amparo de la misma Federacion.

Comprende el suscrito, que la comunicacion del Sr. Gutierrez que obra á fojas 25 de estos autos, no es produccion propia de él, y por esto se abstiene de contestar como tal vez le fuera permitido, haciendo únicamente constar en este escrito, que no encuentra disposicion alguna en que pudiera fundarse la escusa del Promotor en el presente caso, y que no se le oculta la disimulada intencion de ofenderlo, que por medio de esa comunicacion y bajo la firma de Gutierrez, demuestran otros que no son él, y que ya por medio de la prensa han provocado polémicas que no han obtenido, por que con ciertas gentes el silencio es preferible.

Mas volviendo á lo que importa, el Promotor da por reproducido en este, su anterior pedimento y termina con la misma proposicion, que es la siguiente:

Unica.—La Justicia de la Union ampara y protege al C. Prisciliano Zambrano, contra el acto del C. Alcalde 2º de esta ciudad que lo cita para contestar ante él demanda sobre pesos.

Monterey, 27 de Julio de 1874.—*Lic. S. Roel.*

El dictámen á que se refiere el anterior, es el siguiente:

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el C. Prisciliano Zambrano en su ocurno de 30 de Junio último, viene pidiendo á la Justicia federal amparo y proteccion contra el acto del C. Perfecto Gutierrez, que como Alcalde 2º local de esta ciudad, lo cita para que ante él ocurra á contestar una demanda que sobre pesos le promueve el apoderado de este municipio, con cuyo acto cree el ocurrente, violada en su contra la garantía que otorga el artículo 16 de la Carta fundamental de la República, por ser ilegal, y por lo mismo incompetente la autoridad que lo molesta.

La gravedad de la cuestion que origina el Sr. Zambrano en su citado ocurso, exige que con la mayor calma y reflexion sea tratada, con vista de los hechos y del derecho constitucional del Estado en los puntos en que ella se relacione. El que suscribe se propone en cuanto pueda, obrar así, sin preocuparse por la acalorada defensa que de la legalidad de su cargo y validéz de su nombramiento hace el Sr. Gutierrez en el informe que se le pidió y que ha rendido en cumplimiento de la ley relativa, el cual corre agregado á este expediente; y mas que un simple informe acerca de los hechos y cuestiones de ley que se versan, á lo que debió haberse limitado conforme á la ley, parece un alegato de litigante ofendido por su contendiente. Público es y notorio que en el Estado y mas en esta ciudad, de poco tiempo á esta parte todos los ciudadanos sin distincion, aun los mismos agentes del poder, que no debian, han tomado una parte mas ó menos activa y directa en las cuestiones electorales, generales y municipales, al grado de poderse asegurar sin temor de equivocarse, que si no es imposible, si es muy difícil que se encuentre un ciudadano nuevoleonés y mas un vecino de esta ciudad, que haya permanecido indiferente en las luchas de los partidos políticos que se han disputado el triunfo de la eleccion, y que pueda ser en consecuencia absolutamente ageno ó imparcial en las cuestiones que se susciten sobre la legitimidad ó ilegitimidad de los que resulten nombrados. Apesar de esto, el suscrito, nuevoleonés y vecino de esta ciudad, comprendiendo la mision que está llamado á llenar y los deberes que le ha impuesto el ministerio de su cargo, hará abstraccion de toda opinion política para ocuparse solo del estudio de la cuestion que aquí se versa.

Sentado esto, examinemos si en efecto la garantía otorgada en el artículo constitucional citado por el ocurrente, ha sido violada por el C. Perfecto Gutierrez, con el hecho que el mismo quejoso refiere. La pre-

vencion espresa de dicho artículo, es que nadie puede ser molestado en su persona, familia &c, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Se ve que son varios los requisitos que deben concurrir, conforme al art. 16 de la Constitucion, para que alguien pueda ser molestado; pero como el Sr. Zambrano solo se queja de la falta de autoridad competente, á este solo punto deberá limitarse el examen de la cuestion.

Al decir el texto constitucional que el mandamiento escrito en virtud del que se pretenda inferir molestia, debe dimanar de autoridad competente, quiere sin duda que la autoridad sea verdaderamente autoridad, es decir, autoridad legítima, nombrada con arreglo á la ley, porque mal puede haber competencia cuando no hay autoridad, y no la hay cuando se obtiene tal investidura ilegalmente, contra las prescripciones de las leyes que deben observarse; así es, que para averiguar si el Sr. Gutierrez tiene el carácter de autoridad competente, conviene ante todo, saber si está investido de autoridad legítima, ó mejor dicho, de verdadera autoridad, pues no se concibe como pueda haber competencia faltando la autoridad, del mismo modo que no es posible concebir la existencia de las cualidades de una cosa, si no existe la cosa misma, porque la competencia no viene á ser mas que un atributo ó accidente de la autoridad.

El nombramiento de Alcalde 2º local con cuya investidura cita el Sr. Gutierrez al ocurrente, trae su origen del decreto de 20 de Mayo del corriente año, por el que el Congreso del Estado convocó á elecciones extraordinarias de autoridades municipales á los habitantes de esta ciudad, segun aparece comprobado con la copia de la credencial del mismo Sr. Gutierrez, que obra á fojas 15. ¿Pero tal decreto ha sido expedido por el Congreso conforme á sus facultades?

El art. 38 de la constitucion local de

Nuevo Leon, divide el Poder Supremo del Estado para su ejercicio, en Electoral, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y el 39 siguiente, expresa que dichos poderes deriban del pueblo, y que se limitan solo al ejercicio de las facultades espresamente designadas en la misma Constitucion, y añaden que no pueden entenderse permitidas otras, por falta de espresa restriccion; si pues alguno de estos poderes abrogándose facultades que no le estan designadas espresamente en la Constitucion, llega á mandar ó prohibir algo, es evidente que tal mandamiento ó prohibicion, pecaría contra el art. 39, y el poder que tal hiciera, cometería una infraccion patente de dicho artículo, viniendo á quedar reducida la disposicion que así dictara, á una disposicion arbitraria y anticonstitucional, como opuesta á un artículo de la Constitucion misma.

Ahora bien, y supuesto que el decreto del Estado de 20 de Mayo no es sino el resultado de los diversos acontecimientos que han venido sucediéndose desde Diciembre del año próximo pasado con motivo de la cuestion electoral de autoridades municipales, convendrá, antes de pasar adelante, detenernos en las consideraciones á que dichos acontecimientos dan lugar.

Conforme al art. 30 de la ley constitucional de 16 de Octubre de 1857, las asambleas populares se reunieron el segundo domingo del citado Diciembre á elegir á sus funcionarios municipales, y en cumplimiento del art. 34 se reunieron tambien los escrutadores el tercer domingo del mismo mes, é hicieron la declaracion de funcionarios municipales con arreglo al art. 36, comunicando en seguida sus nombramientos á los ciudadanos que obtuvieron la mayoría de sufragios, para que se presentaran á desempeñar sus cargos el 1º de Enero del corriente año, lo cual no se verificó al fin, porque desgraciadamente, unidos los poderes Legislativo y Ejecutivo, se opusieron tenazmente á reconocer como legítima la declaracion de funcionarios hecha por la junta de escruta-

dores, y el primero de dichos poderes, firme en su propósito, avanzó hasta á expedir el decreto núm. 27 de 23 de Diciembre de 1873, declarando en su art. 1º nulo lo hecho por la mayoría de la junta de escrutadores, y nulas por consiguiente, las credenciales que habia extendido de funcionarios municipales. Todo esto, á mas de ser notorio, está comprobado con el número 41 del "Periódico Oficial", que obra á fojas 16 y 17.

Prescindiendo de la anticonstitucionalidad de este último decreto, que abiertamente infringió el art. 44 de la constitucion local, que declara á las asambleas electorales independientes de todo otro poder político, y prohíbe que autoridad alguna les dé órdenes, impida sus funciones ó revise sus actos, y el art. 39 que prohíbe tambien á los poderes del Estado abrogarse otras facultades que no sean las espresamente consignadas en la misma constitucion, supuesto que el Congreso, por el art. 66, no solo no tiene espresa la de revisar actos electorales municipales, sino por el contrario, terminantemente se le prohíbe por el citado art. 44; y prescindiendo tambien de que solo el primero de los cuatro artículos que contiene dicho decreto, ha quedado subsistente para ahora, pues contra los tres restantes, la Justicia federal ha amparado á los individuos particulares y determinados á quienes se referian, se ve muy claro que si los actos de los escrutadores y las credenciales que ellos espidieron fueron declaradas nulas por el Congreso, no sucedió lo mismo con los nombramientos de los mismos escrutadores que habian recibido de las asambleas populares, pues muy al contrario, hasta el mismo Congreso reconoce la legitimidad y validez de dichos nombramientos, como bien claro se infiere aun del mismo decreto de 23 de Diciembre; en consecuencia de esto, á pesar de la nulidad de la eleccion de funcionarios municipales, quedó subsistente la de los escrutadores, la cual hasta ahora no ha sido invalidada ni puede serlo, porque no hay

autoridad que para ello tenga facultades, conforme á la constitucion del Estado.

El art. 47 de la misma constitucion, manda en su primera parte, que siempre que dentro del año haya que hacerse alguna eleccion municipal, se reunan con tal objeto los escrutadores de las respectivas secciones, y el art. 39 de la ley constitucional de 16 de Octubre de 1857, que reglamenta la prevencion anterior, espresa lo mismo; por consiguiente, si á causa de la nulidad de las elecciones de Diciembre debia verificarse otra dentro del año, los escrutadores nombrados conforme á las prescripciones constitucionales que acabamos de ver, son los que deberian reunirse para hacerla, por que solo á ellos comete esta facultad la constitucion misma, y proceder de otra manera es viciar la eleccion, porque se contraviene á lo espresamente mandado.

Pero el Ayuntamiento, de que es miembro el C. Perfecto Gutierrez, no debe su nombramiento á la junta de escrutadores, no obstante que la eleccion se hizo dentro del año, sino al decreto de 20 de Mayo de que se habló al principio; no se hizo en consecuencia, conforme á la constitucion y ley relativa reglamentaria, y no puede por lo mismo, considerarse como legítima, porque como se verá en seguida, el Congreso, al expedir su decreto de 20 de Mayo, ha obrado fuera de sus facultades constitucionales, infringiendo varias de las prescripciones terminantes del Código del Estado.

En efecto, hemos visto el modo como deben hacerse dentro del año las elecciones municipales conforme al art. 47 de la Constitucion y el 39 de la ley que lo reglamenta; hemos visto tambien que el art. 39 de la misma constitucion, manda que los poderes del Estado, de los cuales el Congreso es uno de ellos, deben limitarse solo al ejercicio de las facultades que les demarca la misma Constitucion, y se ve por último, que entre las que dá el Congreso en el art. 66, no se encuentra la de convocar á elecciones extraordinarias de funcionarios mu-

nicipales, ni se concibe como pudiera existir tal facultad, cuando el art. 47 habia determinado ya el modo de celebrar tales elecciones, pues era necesario suponer que los legisladores del Estado, en 1857, carecian de la necesaria ilustracion é inteligencia para comprender la patente contradiccion en que se ponian de este modo los citados artículos 47 y 66.

Es consiguiente, preciso y lógico, de lo espuesto, que el Congreso del Estado, al expedir su decreto de 20 de Mayo, faltó á la Constitucion, abrogándose facultades contra una prohibicion espresa, ó lo que es lo mismo, no tuvo facultades para expedirlo, y la eleccion verificada con motivo de él, fué viciosa é ilegal; y supuesto que el Sr. Gutierrez, lo mismo que el Ayuntamiento de que forma parte, deben á ella su investidura, esta tambien es viciosa é ilegal, ó en otros términos, el C. Perfecto Gutierrez carece de autoridad legal, lo mismo que carecen de legal investidura los demas miembros de dicho Ayuntamiento.

Siendo esto así, la cuestion principal queda ya resuelta; porque si carece el C. Perfecto Gutierrez del carácter de autoridad legal, con mayor razon debe decirse que no es competente para inferir molestias á ningun ciudadano, segun queda demostrado en el segundo párrafo de este pedimento, al cual se refiere sobre este punto el que suscribe.

Con lo espuesto queda demostrado, que el C. Prisciliano Zambrano con sobrada razon y justicia ha promovido este juicio de amparo, y quedan igualmente contestados los muy pocos argumentos de importancia que contiene el informe del Sr. Gutierrez, aun los que deduce de los varios supuestos que menciona, pues en contra de cada uno de ellos existen terminantes disposiciones constitucionales que á nadie es dado eludir, y que todos estamos obligados á acatar, sea cual fuere el modo de pensar de cada ciudadano.

En el informe referido, parece que se po-

ne en duda la competencia de la Justicia federal para conocer en la presente cuestion, á protesto de que se vulnera la soberanía del Estado, por versar sobre un asunto que toca al régimen interior; pero se olvida que si es cierto que los Estados de la confederacion mexicana son libres é independientes en su régimen interior, no lo es menos que segun el art. 41, tal soberanía solo la ejercen en los términos respectivamente establecidos por la Constitucion y las particulares de cada uno de ellos, lo cual indica que cuando se falta á las prescripciones de dichas constituciones particulares, como aquella soberanía no es absoluta y se contra viene á lo dispuesto en la Constitucion general, sobre cuyo cumplimiento debe velar la Justicia de la Union, no es dudosa su competencia para resolver en cuanto á los casos especiales que ocurran.

Además, supuesto que por la fraccion 1ª art. 101 de la Constitucion de la República, á los tribunales federales toca resolver toda controversia que se suscite por leyes ó actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales, es evidente que no estan exceptuados los actos de las autoridades locales, cuando existe la violación, ni los que en el mismo caso toquen al régimen interior del Estado.

Fundado en lo espuesto y en la fraccion 1ª art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, y á reserva de ampliar sus razonamientos en el respectivo alegato, concluye el Promotor, sujetando á la aprobacion del Juzgado la proposicion siguiente:

Unica: La Justicia de la Union ampara y protege al C. Prisciliano Zambrano, contra el acto del C. Alcalde 2º de esta Ciudad, que lo cita para contestar demanda sobre pesos, ante él.

Monterey, 9 de Julio de 1874.—*Lic. S. Roel.*

Es copia que certifico. Monterey, 11 de Agosto de 1874.—*Lic. S. Roel.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Monterey, Agosto 3 de 1874.—Visto este juicio de amparo promovido por el C. Prisciliano Zambrano, contra el acto del C. Alcalde 2º de esta Capital, Lic. Perfecto Gutierrez, por el que lo citó conminándole con una multa si no comparecia á contestar lo demanda que sobre cobro de pesos puso en su contra el C. Julio Treviño, como apoderado de la Ciudad, mandándolo despues otras citas en que se le prevenia que compareciera trayendo la multa en que habia incurrido, é imponiéndole otra si no cumplia con lo que se habia dispuesto, sin perjuicio de seguirse la demanda en su rebeldía; por creer el quejoso que con esos actos se viola la garantía que otorga el art. 16 de la Constitucion general, por proceder de un Juez ilegítimo é incompetente.

Visto el informe de la autoridad ejecutora de esos actos, á que acompaña varios informes y una copia de la credencial de haber sido nombrado Alcalde 2º en Junio último, manifestando: que es Juez nombrado conforme á las leyes del Estado, y que no toca al Poder Judicial de la Federacion conocer de ese negocio por pertenecer al régimen interior, en lo cual son libres y soberanos los Estados. Visto lo expuesto por el C. Promotor fiscal, en que pide que sea amparado el querellante. Vistas las pruebas rendidas por el Sr. Zambrano, en las que constan diversas órdenes del mismo Juez, relativas á llevar á efecto lo que dispuso en la primera; una copia de varias disposiciones locales de este Estado y algunos impresos. Vistos los alegatos del C. Promotor fiscal y del quejoso, rendidos con presencia de las pruebas, robusteciendo sus pretensiones. Y visto todo lo demas que consta en autos, y

Considerando: que los Tribunales de la federacion deben conocer de toda controversia que se suscite por leyes ó actos de cualquiera autoridad, que violen las garan-

tías individuales, (art. 101 de la Constitución federal.)

Que la soberanía de los Estados debe limitarse á las prescripciones del Código fundamental, al que tienen que sujetarse todas las autoridades, sin ninguna distinción, y en donde están determinadas las facultades de cada una, sin que nadie pueda traspasarlas ni quejarse de que otra gire dentro de su órbita, arts. 40 y 41 de la Constitución general, pudiendo decirse, que no se afecta el régimen interior de los Estados por los juicios de amparo, en virtud de que no se dan disposiciones generales, sino especiales al caso propuesto, sin que dejen de subsistir la ley ó autoridad contra las que se conceden, y mas cuando de un modo muy indirecto se hace la calificación, segun lo espresamente dispuesto en el Pacto de la República.

Que una de las garantías que otorga la Constitución en su art. 16, es, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio &c, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento; pudiendo por lo mismo, la Justicia federal conocer, segun el art. 101, de si se ha violado ó no tal garantía, necesitando en este caso examinar si el que se dice que la viola es Juez, y si es competente, teniendo presentes las disposiciones de los Estados para resolver conforme á ellas, si la autoridad es autoridad, ó si traspasa sus facultades.

Que previniendo dicho artículo 16 que para que no haya violación de garantías es preciso que la autoridad sea competente, debe determinarse antes lo que se entienda por esas palabras, y cual haya sido la mente de los constituyentes de 57.

Que aunque sobre ese punto han escrito personas de esclarecido talento, sosteniendo unas que los jueces ilegítimos son incompetentes, y otras que no lo son, por haber gran diferencia entre ilegitimidad é incompetencia, si bien todas han convenido en

que tiene lugar el amparo cuando una autoridad traspasa sus facultades: sin embargo, el Juzgado tendrá que decidirse por lo que le parezca mas conforme á la letra y espíritu de la Constitución.

Que para que no tenga lugar el amparo se necesita que la autoridad sea competente, esto es, las dos cosas, que sea autoridad y que sea competente, dejándose entender que debe ser de derecho ó legítima, y no de hecho; de manera, que si le falta cualquiera de esas cualidades, habrá lugar al amparo.

Que si el amparo tiene lugar cuando una persona, en quien recae un principio de autoridad, extiende sus facultades mas allá de lo que las leyes se lo permiten, con mas razón debe tener lugar cuando esa persona por derecho carece absolutamente de autoridad; porque si se quiso garantizar al hombre de las molestias de un juez que ensancha en parte su jurisdicción, es claro que se quiso mejor garantizarlo del que se la abraza en su totalidad, en todos sus actos, desde el primero al último, por ser ilegítimo, ó solamente de hecho y no de derecho.

Que si se dice incompetente un juez por que extiende su jurisdicción mas allá de lo que puede por derecho, no hay duda que el que la toma en el todo por carecer de título legal, es absolutamente incompetente, de modo que el Juez ilegítimo siempre es incompetente, aunque el incompetente puede ser ilegítimo.

Que si todos convienen, los que sostienen el pró y el contra, en que la autoridad federal conozca del juicio que se entable contra los actos de un Juez que se ha salido de la esfera de sus facultades, teniendo que calificarse entonces la mayor ó menor extensión de esas facultades del Juez, segun las leyes locales, sin que se entienda que se ataca la soberanía de los Estados en su régimen interior, por que son examinadas sus leyes, no hay razón para decir lo contrario cuando esas mismas leyes se examinan para determinar si la autoridad es ó no legal, porque se hace lo mismo en uno y otro caso.

Que siendo los derechos del hombre la base y objeto de las instituciones sociales, y proviniendo del pueblo todo poder público ó instituyéndose para su beneficio, no es de suponerse que á ese pueblo, á todos los gobernados, no les quede ningún remedio legal, el amparo, para objetar á los gobernantes su falta de poder, porque no puede por derecho insurreccionarse; y cuando los Poderes, que ese mismo pueblo ha establecido, pueden pedir el auxilio federal, na habría equilibrio alguno entre gobernantes y gobernados, y por lo que es mas natural entender que quepa el amparo contra las autoridades ilegítimas, y principalmente cuando la incompetencia parcial puede alegarse ante las autoridades de los Estados y obtenerse un resultado favorable, sin que pueda hacerse lo mismo con la absoluta ó que proceda de ilegitimidad.

Que deduciéndose de todos estos antecedentes que la autoridad federal es competente para conocer de la incompetencia parcial y de la absoluta de las autoridades, conviene que se fije si el C. Alcalde 2º de esta Ciudad es ó no autoridad ilegítima, cuyo vicio se le ha objetado por el quejoso.

Que segun el artículo 41 de la Constitución general, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Union y los de los Estados, conforme á la Constitución general y las particulares, asegurándose así á los ciudadanos, que aquellos Poderes no podrán obrar mas allá de las facultades que se les ha concedido en las Constituciones, y que no tendrá ni surtirá efecto lo que se haga fuera de esas facultades de que se desprendió el pueblo, en quien reside la soberanía; lo mismo que no tiene efecto lo hecho por un apoderado que traslimita su poder.

Que en Diciembre de 1873, hubo elecciones municipales en esta Capital, y fueron anuladas por el decreto de la H. Legislatura de este Estado de 23 del mismo Diciembre, disponiéndose que los escrutadores hicieran nuevo cómputo, y lo que no

habiéndose verificado, se dictó otro decreto en 20 de Mayo de este año, convocándose al pueblo para que nombrara autoridades para esta Ciudad, de las que es una, el C. Alcalde 2º

Que segun los artículos 38 y 39 de la Constitución local, el Poder Supremo del Estado se divide para su ejercicio en electoral, legislativo, ejecutivo y judicial, limitándose cada uno de ellos á las facultades expresamente designadas en la Constitución, sin que se entiendan permitidas otras por falta de expresa restricción; siendo de notar, se en esa Constitución, que el Poder electoral es uno de los Supremos del Estado, tan independiente como cualquiera de los otros.

Que las asambleas electorales se instalan por su propio derecho, son independientes de todo otro poder político, y ninguna autoridad puede dárles órdenes, impedir sus funciones, ni revisar sus actos: artículo 44 de la Constitución particular.

Que la Junta de escrutadores de Diciembre último, fué una asamblea electoral; por que puede elegir absolutamente sin sujetarse á regla ni restricción alguna, hasta á todos los municipales, cuando faltan dentro del año, artículo 47 de la Constitución del Estado, y 39 de la ley electoral de 26 de Octubre de 57; por que puede hacer el escrutinio de los que hayan obtenido votos, y declarar al que obtenga la mayoría, y en caso de empate, hacer tambien la eleccion, artículo 36 y 37 de la misma ley constitucional de Octubre; y porque segun el artículo 25 de la propia ley y el 51 de la general de 12 de Febrero de 1857, asamblea electoral es, la que hace la regulacion de sufragios y declara al que obtiene mayoría, ó elige si nadie la obtuvo, teniéndose en ambas leyes una definicion constitucional de lo que se entiende por asamblea electoral.

Que el poder electoral municipal, está investido de mayores facultades por la Constitución, que el de los altos funcionarios del Estado, porque aquel puede elegir en algunos casos absolutamente y sin ninguna

restriccion, y este no tiene esas facultades, artículos 47 y 89 de la Constitucion particular.

Que la H. Legislatura, solo tiene las facultades que le acuerda la Constitucion del Estado, sin que se entienda que tienen otras por falta de expresa restriccion, artículo 39 de la Constitucion; y en sus facultades, que están descritas en el artículo 66, no hay la de que pueda nulificar las elecciones municipales; y antes por el contrario, el artículo 44 se lo prohíbe absolutamente, al grado de que nadie pueda revisar los actos de las asambleas electorales, como lo es la de los escrutadores; ni menos cuando el poder electoral en el Estado es tan soberano é independiente como cualquiera de los otros, sin que nadie pueda mezclarse en las atribuciones de cada uno.

Que de todas estas premisas, se deduce: que el H. Congreso del Estado al dictar sus decretos de Diciembre y Mayo últimos, extendió sus facultades fuera de lo que puede y le permiten la Constitucion del Estado y su ley electoral, que es tambien constitucional; no debiendo por lo mismo tener efecto los actos de una de las autoridades, que tienen su origen de esas disposiciones, en el caso especial sobre que se ha pedido amparo.

Que aunque se dice que si el Congreso no revisara los actos electorales de los municipios, no habría autoridad que pudiera conocer de la nulidad de las elecciones; no parece que esto dé derecho, por que la ley calla, á que un poder adquiriera facultades que no se le han concedido por la Constitucion, y que por el contrario, se le han negado; por que lo mismo podría decirse del Congreso cuando erigido en asamblea electoral hace la computacion y eleccion de los altos funcionarios del Estado, conforme al artículo 66 fraccion 14 de la Constitucion, y 25 de la ley electoral; así como tambien respecto del de la Union, al hacer igual cómputo para Presidente de la República y Ministros de la Suprema Corte; pues aun-

que al hacer el cómputo esos cuerpos, hubiere error, no sería eso motivo para que otro poder sin facultades, fuera á nulificar la eleccion.

Que no obstante que el Congreso de este Estado ha conocido varias veces de la nulidad de las elecciones de los municipios; esto ha sido contra el tenor expreso de la Constitucion, la cual no puede modificarse ni por acuerdos, ni por leyes que la contradigan, sino bajo las fórmulas que ella misma establece, no pudiendo perder su fuerza y vigor aunque sea interrumpida su observancia, artículo 122 de la Constitucion local, que es del todo conforme con el 128 de la general.

Considerando por último, cuánto considerar convino, y de conformidad con las disposiciones citadas y con la ley de 20 de Enero de 1863, el C. Juez de Distrito de Nuevo Leon, dijo:

Primero: que la Justicia federal ampara y protege al C. Prisciliano Zambrano, contra los actos del C. Alcalde 2º de esta Ciudad, por los que lo mandó citar, conminándolo con multas y con seguir el juicio en rebeldía, si no obsequiaba las citaciones que se le hicieron.

Segundo: notifíquese, publíquese en el periódico oficial del Estado, sáquense las copias respectivas, y remítase este juicio á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

Así definitivamente juzgando, lo decretó y firmó el expresado C. Juez, por ante mí el secretario. Doy fé.—*Lic. T. Valdés Gomez.*—*Pablo Borrego*, secretario.

Es copia que certifico. Monterey, Agosto 11 de 1874.—*Pablo Borrego*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Setiembre 21 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por el C.

Prisciliano Zambrano ante el Juzgado de Distrito de Nuevo Leon, contra el Alcalde 2º de Monterey Lic. Perfecto Gutierrez, que lo citó á juicio verbal y lo conminó con imponerle multas si no concurría al juicio que le promovió el C. Julio Treviño, y con fallar en rebeldía, con lo que el quejoso dice, que se vulnera en su persona la garantía á que se refiere el artículo 16 de la Constitucion general, por no ejercer autoridad legítima el C. Alcalde Lic. Perfecto Gutierrez. Considerando: que segun lo que consta en autos, se ha vulnerado en la persona de Zambrano la garantía que invoca; de conformidad con lo que dispone el artículo 101 de la misma Constitucion, y además por los legales fundamentos en que se apoya la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Nuevo Leon, se decretar que se confirma la indicada sentencia, fecha 3 de Agosto último, que declara: que la Justicia federal ampara y protege al C. Prisciliano Zambrano, contra los actos del C. Alcalde 2º de Monterey, por los que lo mandó citar conminándolo con multas y con seguir el juicio en rebeldía, si no obsequiaba las citaciones que se le hicieron.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese, y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoria de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Arza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México Octubre 19 de 1874.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Morelos por los Sres. D. Ramon Portillo y Gomez y socios, contra el decreto promulgado en 7 de Mayo de 1874, por la Legislatura de dicho Estado.

PRIMER PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el C. Lic. Antonio Robert, se ha presentado por el escrito que antecede, pidiendo amparo como apoderado sustituto de los Sres. D. Ramon Portillo y Gomez, D. Isidoro de la Torre, D. Joaquin Garcia Icazbalceta, D. Pío Bermejillo, D. José T. Guerra y D. Alejandro Arenas, propietarios de fincas rústicas en el Estado, contra la ley de Hacienda expedida para el mismo, en 6 de Mayo próximo pasado. Fundan su queja, en que la mencionada ley es retroactiva y fué promulgada por autoridad que ilegítima, es incompetente para ocasionarles molestias en sus intereses y posesiones, y por consiguiente, con su ejecucion se violan las garantías que otorgan los artículos 14 y 16 de la Constitucion.

La Suprema Corte de Justicia tiene declarado en diversas ejecutorias, que la incompetencia por ilegitimidad, está comprendida como cualquiera otra, en la prohibicion del artículo 16 del Pacto federal; pero reservando este punto y el de retroactividad de la ley, que ahora se reclama, para ocuparme de ellos en lugar oportuno en mi pedimento sobre lo principal, y concretándome por ahora al punto de suspension, he tenido siempre como regla, y en consecuencia, he pedido constantemente como Promotor, que la suspension debe decretarse, siempre que el acto reclamado cause á los quejosos gravámen irreparable en la sentencia definitiva del juicio de amparo, y cuando su consumacion haga inútil ese juicio